

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que en este juicio ejecutivo de cobro de facturas tramitado ante el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso bajo el Rol C-2496-2019, caratulado “Acarma Montajes Industriales y Construcción Ltda. Con Gobierno Regional Valparaíso”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la parte ejecutante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno que rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó el fallo de primer grado de veinte de julio de dos mil veinte que acogió la excepción de falta de requisitos del título para que este tenga mérito ejecutivo y, en consecuencia, denegó la ejecución.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

2º.- Que el recurrente esgrime la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil ya que la sentencia acoge la excepción del numeral 7º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil por argumentos diferentes a los expuestos por el demandado quien alegó en su defensa la excepción de contrato no cumplido respecto del negocio causal que ligaba a las partes pero que, según el impugnante, no especificó cuales serían los incumplimientos en que incurrió su parte. A pesar de ello, la sentencia acogió la excepción invocando la falta de acuso de recibo de los servicios y por no contar con la autorización previa para la emisión de la factura como se requería en el contrato, de manera que no era exigible.

3º.- Que el defecto formal denunciado no podrá tener acogida ya que los hechos sobre los cuales se construye el argumento no configuran la causal invocada. Cabe recordar que la doctrina comparada ve en la denominada ultra petita -más allá de lo pedido- un vicio que ataca un principio rector de la actividad procesal cual es el de la congruencia, esto es, la falta de adecuación entre las pretensiones de las partes, formuladas oportunamente y la parte dispositiva de la resolución judicial.



Dicho lo anterior, la revisión de los antecedentes permite constatar que los jueces del fondo se limitaron a resolver exactamente lo pedido, acogiendo la excepción de falta de requisitos del título para que tenga mérito ejecutivo, que en una de sus argumentaciones, se sustentó en que la factura no sería exigible al no haber cumplido el ejecutante todas las obligaciones que le imponía el contrato que ligaba a las partes consistente en el proyecto de reposición del Estadio Municipal de El Tabo”, en particular, aquellas relativas al cumplimiento de los requisitos para emitir la respectiva factura asociada a un determinado estado de pago de la obra y a la exigencia de que existiera recepción provisoria de ella, para efectos de solicitar la devolución de las retenciones de ese proyecto. Al respecto, puede observarse que el fallo, luego de analizar la prueba rendida, concluyó que no se reunían los requisitos para emitir la factura que se cobra, pues para ello según el contrato era necesario que previamente se hubiera autorizado su emisión por la unidad técnica a cargo de revisar la ejecución de la obra, lo que su parte no demostró que haya ocurrido, a lo cual suma que la factura no contiene el acuse recibo material ni electrónico.

En consecuencia, no se advierte un pronunciamiento que haya podido exceder el marco legal que correspondía a los sentenciadores examinar conforme a las acciones y excepciones que fueron objeto de la litis y, por ende, el recurso de invalidez formal, en esto, no puede prosperar.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO

4º.- Que en el arbitrio de nulidad sustancial se reclama la vulneración del artículo 1698 del Código Civil, artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3, 5 y 9 de la Ley N° 19.983, toda vez que se acogió una de las excepciones opuestas a pesar que el ejecutado no rindió prueba que la sustentara, siendo el juez quien disponiendo una medida para mejor resolver, incorporó las bases administrativas que formaban parte del contrato que ligaba a las partes.

Por otra parte, cuestiona que se haya dado lugar a la excepción sin que haya sido recibido a prueba precisamente el hecho en que se fundó, cual es, si se contaba con la autorización de la unidad técnica para emitir la factura asociada al estado de pago N° 8.



Estima, además, que al sostener que su parte debía demostrar que había cumplido con los requisitos pactados para emitir la factura, se altera la carga probatoria pues en definitiva le impone demostrar la fuerza ejecutiva del título no obstante que ello era deber del ejecutado.

Finalmente, sostiene que resultaba improcedente reprochar la falta de acuse de recibo toda vez que al no haberse impugnado la factura de conformidad al artículo 3 de la Ley N° 19.983, el documento goza de una presunción de entrega de los servicios de construcción cuyo cobro se persigue. Explica que, independientemente de la naturaleza del acuse de recibo por la entrega de los servicios, material o electrónico, o bien la omisión del mismo, la factura siempre tendrá fuerza ejecutiva en la medida que no haya sido reclamada en la oportunidad y en la forma indicada en la ley, y como se dijo, dicho reclamo en cuanto a la falta de entrega de servicios de construcción, no se produjo ni en la fase previa a la gestión preparatoria, ni en la gestión preparatoria propiamente tal, ni en el contradictorio, con lo que se evidencia, de paso, clara transgresión a lo dispuesto en el artículo 19 inciso 1, del Código Civil.

5°.- Que, en relación a las infracciones denunciadas cabe recordar, en primer lugar, que el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que el escrito en que se lo interpone exprese, es decir, explicita, en qué consiste y cómo se ha producido el o los errores de derecho.

6°.- Que, entonces, versando la contienda sobre la procedencia de la excepción de falta de requisitos del título, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante al relacionar las normas denunciadas con aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida, en la especie, el artículo 464 numeral 7 ° del Código de Procedimiento Civil, que contempla precisamente la excepción que el recurrente pretende sea rechazada íntegramente en el fallo de reemplazo que se dicte en el evento de dar lugar al presente arbitrio, y al no hacerlo genera un vacío que esta Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado.



7º.- Que, en relación al cuestionamiento de recibir a prueba un supuesto fáctico determinado, ha de considerarse que el vicio que se denuncia en el recurso corresponde más bien a una supuesta inobservancia formal y adjetiva que pudo sustentar un recurso de casación en la forma, pero no autoriza a ser reclamado mediante un arbitrio de nulidad sustancial como el intentado, advirtiéndose, por lo demás, que al momento de declararse admisibles las excepciones, estas fueron recibida a prueba en términos suficientemente amplios para comprender todas las alegaciones en que se fundaron.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo previsto en los artículos 772, 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se declaran inadmisibles** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado Mauricio Silva Figueroa, en representación de la parte ejecutante, contra la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Rol N° 90.929-2021.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sr. Mauricio Silva C., Sra. María Angélica Cecilia Repetto G., y los Ministros Suplentes Sr. Juan Manuel Muñoz P. y Sr. Mario Gómez M. No firman la Ministra Sra. Repetto y el Ministro Suplente Sr. Gómez M., no obstante haber ambos concurrido al acuerdo del fallo, por estar con permiso la primera y haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintidós.





En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

